En sesión de 22 de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la reasunción de competencia 43/2014, presentada por la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

En ella determinó reasumir su competencia originaria para conocer de un amparo en revisión en el que dos personas impugnaron la constitucionalidad de los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, al transgredir los principios de igualdad y no discriminación, al excluir a las parejas homosexuales del acceso a la figura del matrimonio.

En el caso, dos mujeres presentaron su solicitud de matrimonio ante la Oficialía del Registro Civil correspondiente, misma que con fundamento en los artículos impugnados la consideró improcedente. Inconformes promovieron amparo, el cual les fue concedido por el juez competente, no obstante, según las quejas, omitió pronunciarse sobre la reparación integral en los casos de discriminación por razón del sexo, esto es, respecto de las medidas de reparación del daño. El tribunal colegiado remitió el asunto a este Alto Tribunal para su conocimiento.

La importancia y trascendencia de dicho asunto radica en la posibilidad de estudiar la reparación integral que puede darse en una vulneración a derechos humanos, como aquellas que derivan de contextos de discriminación estructural, a partir del estándar establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como analizar si el juez de amparo ha incurrido o no en una omisión de análisis del tema de constitucionalidad planteado.

Así, de manera enunciativa y dejando plena libertad de jurisdicción, esta Sala estima que en el análisis del recurso de revisión se podrán abarcar los siguientes cuestionamientos:

- a) ¿Qué se debe entender por reparación integral, según el estándar establecido en la citada Corte Interamericana? ¿Cómo ha tratado este tribunal internacional las reparaciones en casos de contextos de discriminación estructural?
- b) ¿El juicio de amparo basado en el principio de relatividad de las sentencias, permite la adopción de las formas de reparación que ha fijado la CIDH en sus resoluciones?
- c) ¿La sentencia emitida por el juez constitucional, en casos que involucren discriminación estructural, podrían generar efectos a otras autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial?

En sesión de 22 de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 280/2013, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que tiene que ver con el tipo de juicio de amparo (promovido por la víctima u ofendido del delito) que procede contra el sobreseimiento firme decretado en una causa penal.

Al respecto, la Primera Sala determinó que es procedente el amparo directo contra la resolución que decreta firme el sobreseimiento de la causa penal (interpretación de los Códigos de Procedimientos Penales Federal y de los Estados de México y de Chiapas).

Al resolver lo anterior, la Primera Sala argumentó que conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo 107 constitucional, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no procede algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas.

En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los códigos de procedimientos penales analizados en la ejecutoria (que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008), por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa.

Lo anterior es así, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado, pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo cual permite determinar que en su contra lo procedente es el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito.

La Primera Sala resolvió en sesión de veintidós de abril del año en curso, por unanimidad de cinco votos, el amparo en revisión 11/2015, presentado bajo la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz e interpuesto por una sociedad mercantil dedicada a la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles.

En dicho asunto, la Sala analizó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se pronunció en el sentido de que las obligaciones impuestas en ese ordenamiento para quienes realicen actividades consideradas por el Legislador Democrático como más propensas o “vulnerables” a ser utilizadas para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita no transgrede los derechos de humanos de igualdad, libertad de comercio y trabajo, ni de seguridad jurídica.

Al respecto, el Tribunal Constitucional enfatizó que proteger el sistema financiero y la economía nacional del blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas es una labor compleja que atañe, para su eficaz combate, no sólo a los órganos de gobierno, sino también requiere de la colaboración de los gobernados y, en el caso concreto, de aquellos que se dedican a una actividad considerada por las mejores prácticas internacionales como susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.

Por tanto, se determinó que la obligación impuesta a la quejosa de recabar información en operaciones comerciales que se le pretendan pagar en efectivo por montos superiores a los previstos en la ley reclamada es compatible con la Constitución Federal y se inscribe en el esquema de coordinación y colaboración que las personas del sector no financiero tienen que observar en aras de cumplir con el objetivo del ordenamiento reclamado. De ahí que se resolviera confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.